

**“ESTUDIO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL ARTÍCULO
PRIMERO DE LA LEY 1648 DEL 12 DE JULIO DE 2013 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE OBSERVANCIA A LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL”**

ALEXIS FLEREZ CARDENAS

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC

FACULTAD DE DERECHO

BARRANQUILLA

2015-2

**“ESTUDIO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL ARTÍCULO
PRIMERO DE LA LEY 1648 DEL 12 DE JULIO DE 2013 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE OBSERVANCIA A LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL”**

ALEXIS FLEREZ CARDENAS

**Trabajo de Grado presentado para optar el título de
Abogado**

**Roberto Jiménez González
Asesor**

**UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC
FACULTAD DE DERECHO
BARRANQUILLA
2015-2**

DEDICATORIA

A mi madre, quien desde siempre me apoyó especialmente en los días en que no había sol y en las noches de lluvia fría. Gracias por darme la vida y las fuerzas para seguir adelante.

A mi esposa, compañera en los caminos de la vida, amiga comprensiva y amorosa.

A mis hijos, continuación de mi existir, vida de mi vida, razón de mis razones, por ustedes mis sacrificios y mis triunfos.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de la Costa CUC. Casa de Estudios Superiores por la rica experiencia formativa que me dio.

A mis profesores, por brindarme lo mejor de sus conocimientos.

A mis compañeros, amigos de mil anécdotas.

RESUMEN

Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países en Latinoamérica con mayor proyección e innovación en el campo Jurídico, ello está netamente asociado con un desarrollo Judicial en materia de derechos sociales, económicos y culturales, al igual que una amplia defensa de los Principios y Valores Constitucionales, emprendida principalmente por parte de los Ciudadanos, en la Corte Constitucional que como guardiana de la Carta Política, ha cimentado el Estado Social de Derecho con los deberes de protección y garantías que emanan del nuevo constitucionalismo, como pilar de la actual carta superior que como lo esboza el Preámbulo en congruencia con los cometidos estatales el estado es una organización política que busca un orden justo.

En este Contexto la presente investigación tiene como objetivo evaluar la constitucionalidad parcial del artículo Primero de la Ley 1648 del 12 de Julio de 2013 *“Por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los derechos de propiedad industrial”* y de ser necesario realizar una acción de inconstitucionalidad presentada ante la honorable Corte Constitucional está determine, en los términos del artículo 241 y demás normas complementarias, si la acusada disposición transgrede los Principios de Dignidad Humana, a la Igualdad, así como el Principio y derecho al Debido Proceso, consagrados en el Estatuto Básico colombiano.

De acuerdo a lo anterior para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se analizaron los diferentes aspectos constitucionales comparándolos con la referida disposición y al encontrar según el autor del presente trabajo méritos suficientes, elaboró la respectiva demanda de constitucionalidad la cual posteriormente se presentó ante la Secretaria de la Corte Constitucional, siendo esta objeto de reparto y admitida, en la actualidad se encuentra en la fase de estudio para expedir, luego del respectivo debate por parte de la sala plena del Tribunal de Constitucionalidad de la respectiva sentencia tipo “C”, pronunciamiento oficial que coloque fin a la controversia suscitada a raíz de la demanda presentada.

PALABRA CLAVES:

Constitucionalidad, Inconstitucionalidad, Ley, Corte Constitucional, Derechos.

ABSTRACT

Colombia has been characterized as one of the countries in Latin America with the greatest innovations and Legal, Judicial associated with development in social, economic and cultural rights , as well as a broad defense of Constitutional principles and values , undertaken mainly by the Citizens Constitutional Court and cemented with the duties of protection and guarantees stemming from the social state of law, as a pillar of the current top card .

In this context the present investigation was to evaluate the partial constitutionality of section one of Act 1648 of 12 July 2013 "through which enforcement measures are established for industrial property rights " and so by action of unconstitutionality submitted to the honorable constitutional court is available to determine if the defendant violates the Principles of Human Dignity, and Equality and the Principle of Due Process, enshrined in the Constitution. According to the above to comply with the objectives, was developed and subsequently present ---, to the secretary of the Constitutional Court, unconstitutional action lawsuit , this being supported currently under investigation for failure.

KEYWORDS:

Constitutionality, Unconstitutional, Law, Constitutional Court, Rights.

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO	
ACTA DE SUSTENTACION	5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	
2. JUSTIFICACIÓN	8
3. OBJETIVOS	9
3.1 OBJETIVO GENERAL	9
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
4. MARCO REFERENCIAL	10
4.1 ESTADO DEL ARTE	11
4.2 MARCO HISTÓRICO	11
4.3 MARCO TEÓRICO	13
5. DISEÑO METODOLÓGICO	43
5.1 CORTE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN	43
5.2 METODO	44
5.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	44
5.3.1 Técnicas de recolección secundaria	44
6. CRONOGRAMA	45
7. PRESUPUESTO	46
BIBLIOGRAFÍA	47
ANEXOS	

INTRODUCCION

A partir de la constituyente de 1991, nuestro Estado, acogió un nuevo ordenamiento político y jurídico, cimentado en principios y valores constitucionales expresados en la norma superior, dentro del marco del Estado Social de Derecho.

Estos principios y valores constitucionales, son reiterados en cada pronunciamiento que emite la Corte Constitucional administrando justicia por medio de sus providencias, las cuales se conocen como Sentencias “S.U.” y Sentencias tipo “T”. Las cuales tratan aspectos relacionados con derechos fundamentales, su conceptualización y aplicación en casos muy específicos a raíz de la potestad dada por la Carta Política en los artículos 86 y 241 Superior. También el Honorable Tribunal realiza el denominado control de constitucionalidad que se expresa en la Sentencias tipo “C” las denominadas sentencias “C”, que son las sentencias producto del estudio constitucional de una norma bajo examen para determinar la constitucionalidad de una norma, es decir, se verifica y la normativa infraconstitucional es congruente con los preceptos establecidos en la Norma Superior.

Por las consideraciones anteriores, este proyecto estuvo encaminado a Instaurar una acción pública de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional, contra el Artículo 1º la Ley 1648 del 12 de Julio de 2013, *“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE OBSERVANCIA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”*, con el objeto de que el Tribunal Constitucional el cual tiene a su cargo la defensa de la supremacía de la Constitución examinará y determinará si la disposición acusada, trasgrede PARCIALMENTE , Principios Constitucionales, al usar una denominación o calificativo exclusivo del derecho penal en un asunto de la jurisdicción civil, ello a la luz de la hermenéutica contraria los aspectos de igualdad y dignidad.

La disposición acusada violenta de forma directa el principio constitucional de la dignidad humana consagrado en el Artículo 1 de la Constitución Política, toda vez, que al utilizar un calificativo como lo es “PROCESADO” denominación exclusiva del derecho penal, empleada para identificar al sujeto acusado dentro de una acción de tipo penal y quien ya se le está siendo juzgado, ocasiona para este caso violación directa al principio constitucional de la dignidad humana, amparado dentro del estado social derecho, teniendo en cuenta que el Estado Social de Derecho está fundado en la dignidad del ser humano, obligándose a la organización política a proteger los derechos que materializan la posición de la persona, con garantías o derechos intransferibles, no negociables comercialmente de forma categórica.

Por las consideraciones anteriores, se instauro ante la Corte Constitucional, la pertinente demanda de acción de inconstitucionalidad, contra la disposición acusada de vulnerar la constitución política de 1991, en aras de que el tribunal constitucional realice el correspondiente control de constitucionalidad y decida si el Artículo 1° la Ley 1648 del 12 de Julio de 2013, “*POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE OBSERVANCIA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL*” de la norma demandada es concordante o no con el ordenamiento Superior.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La normatividad jurídica tiene su principal sustento en la concordancia y respeto por el ordenamiento superior, con ello se da seguridad jurídica al sistema que tiene por finalidad brindar estabilidad a la sociedad enmarcada en un contrato social determinado.

En virtud de ello, las leyes, decretos ley y demás disposiciones no pueden ser contrarias a la Constitución Política, pues la validez de estos cánones tiene como principal argumento y principio la correspondencia con la totalidad de la norma superior. Ello taxativamente se desprende del artículo 4 de nuestra actual Carta Política en cual expresa:

“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

La anterior normativa se convierte en una regla que cohesiona y condiciona la totalidad del universo jurídico. En consecuencia en caso de presentarse incompatibilidad entre la Constitución y cualquier norma se aplicaran las disposiciones superiores ocasionando además, la expulsión de la norma no concordante con la Carta Magna, de nuestro sistema jurídico.

En razón a la anterior premisa el Artículo 1° la Ley 1648 del 12 de Julio de 2013, *“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE OBSERVANCIA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”*, trasgrede PARCIALMENTE el referido Principio Constitucional, al usar una denominación o calificativo exclusivo del derecho penal en un asunto de la jurisdicción civil, creando una desigualdad ante los operadores jurídicos ya que la técnica del lenguaje activa ciertos conceptos que permiten la coherencia sistémica en cada área del derecho. Lo cual produce una necesaria especialización que denota la profundidad y acoge y explicita ciertos valores dentro de la semiótica jurídica.

A raíz de las anteriores consideraciones y las subsiguientes que serán oportunamente expuestas, se infiere que la siguiente disposición es parcialmente inconstitucional:

“ARTÍCULO 1°. PRIMERO DE LA LEY 1648 DEL 12 DE JULIO DE 2013 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE OBSERVANCIA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”

Artículo 1°. Solicitud de información. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, la autoridad competente para resolver los procesos civiles en materia de propiedad industrial, estará facultada para ordenarle al procesado que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en la infracción, así como de los medios, instrumentos de producción o canales de distribución utilizados para ello. Para estos efectos la autoridad competente podrá decretar medidas cautelares.

Para los objetivos del presente trabajo es necesario realizar una precisión conceptual respecto a lo que se entiende por Hermenéutica el cual es un vocablo, (del griego hermeneutikós, interpretación) en términos generales es la pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece.

Aunque en un principio la hermenéutica constituyó un campo cuya aplicación se vio restringida exclusivamente a cuestiones de carácter bíblico, hoy en día se emplea en el análisis e interpretación de textos y contextos filosóficos, históricos, literarios, científicos, etc.

Fueron los alemanes Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) y Edmund Husserl (1859-1938) quienes empleando a la hermenéutica como método pretendieron explicar toda manifestación de la vida del hombre.

Ya específicamente, para la interpretación de textos pueden citarse tres métodos como los más importantes:

- a) El análisis de contenido norteamericano, que constituye la alternativa neopositivista de investigación social empírica más utilizada.

- b) La semiótica naturalista francesa.

- c) La hermenéutica, misma que ha sido empleada desde hace más de dos siglos por los historiadores, principalmente.

Como dato curioso he de decir que correspondió a la hermenéutica fundamentar la separación entre las llamadas ciencias naturales y las ciencias sociales, y dadas sus

características originales, cedió mucho terreno frente a la postura positivista del análisis de contenido norteamericano.

Tal es la circunstancia por la cual la hermenéutica no ha tenido en México un impacto importante, aunque justo es decir que a últimas fechas han despertado un vivo interés las ideas de algunos autores de la escuela de Frankfurt, como Walter Benjamin (1892-1940), Theodor Adorno (seudónimo de Theodor Wiesengrund, 1903-1969) y Jürgen Habermas (1929-), entre otros, quienes intentan vincular a la dialéctica marxista con la hermenéutica, aplicadas concretamente a la investigación social.

Porque mucho se ha criticado la estructura que presentan diversas investigaciones sociales en México, fundamentadas en un marco teórico referencial marxista, pero empleando procedimientos investigativos de corte positivista, en el más puro estilo norteamericano.

Los orígenes de la hermenéutica deben buscarse en las intenciones por explicar la Biblia y los clásicos grecolatinos. Más tarde, hacia el siglo XIX, la hermenéutica constituyó un auxiliar básico de la historiografía y de la jurisprudencia, y se esgrimió como concepto clave a la comprensión, infiriendo que si bien el lenguaje es comprensible por otros seres humanos, al mismo tiempo tiene el poder de comprender a esos mismos seres humanos.

Seguramente una de las aportaciones más discutidas de la hermenéutica fue su abierto rechazo a considerar a la historia únicamente como una sucesión de hechos (positivismo histórico). Según la hermenéutica, el intérprete o hermeneuta debe separarse de su tiempo, de sus juicios personales, etc., e intentar lograr una contemporaneidad con el texto de referencia y el autor del mismo, interpretándolos, renunciando a cualquier intención o normatividad de actualidad.

En una posición más reciente, Hans Georg Gadamer postula que la interpretación, sin ser normativa, debe relacionarse con los problemas actuales.

A partir de esta consideración, Habermas afirma que el hermeneuta necesariamente debe tomar en cuenta las circunstancias de enajenación y de dominación institucional en el análisis de su posición y la del autor-texto, evidenciando la distancia existente entre la situación histórico-social del propio intérprete y la correspondiente a la del autor-texto.

Así, ya no se trata exclusivamente de interpretar al autor-texto a través de una especie de intuición psíquica como postularon Schleiermacher y Dilthey, sino de recuperar la comprensión del mundo del autor-texto, y aún superarla por medio de la reflexión.

El denominado círculo hermenéutico es un recurso explicativo a través del cual se establece, desde una óptica evidentemente dialéctica, que el todo siempre es más que la suma de sus partes, pues los elementos sólo resultan comprensibles dentro de todo el contexto, pero también el contexto se explica en función de sus partes y de las relaciones existentes entre

las mismas: la palabra, dentro de la frase; la frase, dentro del capítulo; el capítulo, dentro de todo el texto; el texto, inscrito en su tiempo, etc., y viceversa.

En el plano de lo más común, tal vez uno de los principales rasgos por los cuales se descalifica al proceso hermenéutico, lo constituye la presentación del trabajo final, mismo que no se ajusta a la tradición científicista de presentar separadamente las reflexiones teóricas, las estructuras conceptuales clasificadas y otros criterios de categorización.

Porque, al contrario, el procedimiento hermenéutico ofrece como resultado final un trabajo en forma de lectura que choca a todas luces con los correspondientes a otros derivados de procedimientos nomológicos o inductivos.

Con base en lo anterior, algunos autores, como Eduardo Weiss, consideran que la hermenéutica guarda algunas semejanzas con la etnografía, pues ambas realizan actividades comunes como, por ejemplo, las observaciones que se registran en el diario de campo, para su análisis posterior. Lo mismo puede decirse del producto final, pues en ambos casos, trátase de la hermenéutica o de la etnografía, buscan la comprensión de significado, apoyándose en el relato.

La hermenéutica, como método, ha sido empleada por la teología, la filosofía, la historia, la jurisprudencia, la lingüística y hasta por el psicoanálisis. Pero es con Schleiermacher y con

Dilthey que la hermenéutica adquiere una dimensión específicamente filosófica, partiendo de dos concepciones fundamentales:

- La hermenéutica es el arte evitar el malentendido.
- Si la totalidad de una obra tiene que ser comprendida a partir de sus palabras y de la combinación de las mismas, la comprensión plena del detalle presupone que el propio conjunto ya es comprendido.

En la actualidad, entre las proposiciones hermenéuticas más importantes se encuentran la de Paul Ricoeur y la de Hans Georg Gadamer, autores que propugnan por la existencia de una sola hermenéutica, y de los que Gabriel Gutiérrez Pantoja recupera algunas ideas por demás interesantes, como podrá verse en seguida.

En el caso de Paul Ricoeur, Gutiérrez Pantoja afirma que "la interpretación del comportamiento humano, remitiéndose a la historia, no se contrapone con las de las finalidades que persigue el ser humano, ambas se complementan, aunque dialécticamente se unen y se niegan, se integran y se transforman.

El entendimiento de esto, la comprensión, se consolida solamente mediante la interpretación de la dialéctica entre arqueología y teología. No hay dos hermenéuticas, una de la historia y otra de la aspiración, del deseo, solamente es necesaria una hermenéutica filosófica, una hermenéutica reflexiva sobre lo concreto, que una las concepciones antagónicas dialécticamente.

Con la finalidad de ilustrar los dos momentos de arché y telos en un sólo proceso, Ricoeur dice: "El hombre es el único ser que es presa de su infancia; un ser siempre en retroceso hacia su infancia; incluso atenuando el carácter demasiado histórico de tal interpretación pretérita, resulta que seguimos emplazados frente a una anterioridad simbólica; de esta forma, si interpretamos el inconsciente como el orden de los significantes-clave respecto a cualesquiera sucesos temporalmente interpretados nos remite a un sentido más simbólico de la anterioridad, pero sigue ofreciendo al orden inverso del espíritu el contrapolo que estamos buscando.

Digamos, pues, en términos muy generales: el espíritu es el orden de lo terminal; el inconsciente es el orden de lo primordial. Para explicar esta antítesis en la forma más escueta posible, yo diría: el espíritu es historia, mientras que el inconsciente es destino; destino hacia atrás de lo infantil, destino detrás de unos símbolos que ya están allá y se reiteran independientemente..."

En síntesis, según Ricoeur, durante la infancia se van adquiriendo símbolos que se asientan en el inconsciente, para manifestarse en cada momento de la historia del individuo. Esta dialéctica entre espíritu e inconsciente es el objeto de la filosofía reflexiva, que actúa como una hermenéutica filosófica. La solución entre la confrontación de las hermenéuticas, como principio, está en la dialéctica entre arqueología y teología.

Por tanto, la dialéctica se coloca en el centro de la hermenéutica para comprender el símbolo. En palabras del autor "Es preciso dialectizar el símbolo a fin de pensar conforme al símbolo,

y sólo así resulta posible inscribir la dialéctica dentro de la propia interpretación y regresar a la palabra viva. Esta última fase de la reapropiación es la que constituye el paso a la reflexión concreta. Volviéndose a la escucha del lenguaje, lenguaje, es como la reflexión pasa a la plenitud del habla simplemente oída. Gadamer se apoya en el círculo hermenéutico del todo y las partes, aunque aclara que "El mismo concepto del todo sólo debe entenderse como relativo. La totalidad del sentido que se trata de comprender en la historia o en la tradición no se refiere en ningún caso al sentido de la totalidad de la historia... la finitud de la propia comprensión es el modo en el que afirman su validez la realidad, la resistencia, lo absurdo e incomprensible. El que toma en serio esta finitud tiene que tomar en serio la realidad de la historia."

Una vez hechas estas precisiones, podemos exponer la síntesis de lo que Gadamer considera como comprensión y dónde y cómo se realiza:

1. comprender es ponerse de acuerdo con alguien sobre algo;
2. el lenguaje es, por tanto, el medio universal para realizar el consenso o comprensión;
3. el diálogo es modo concreto de alcanzar la comprensión;
4. todo comprender viene a ser así un interpretar;
5. la comprensión, que se realiza siempre, fundamentalmente, en el diálogo por medio del lenguaje, se mueve en un círculo encerrado en la dialéctica de pregunta y respuesta;

6. la dimensión lingüística de la comprensión, indica que es la concreción de la conciencia de la historia efectuar;

7. La tradición consiste en existir en el medio del lenguaje, en cuanto el pasado se actualiza, se reconoce su sentido a menudo con nuevas iluminaciones."

Derivado de esto, el autor propone en su texto: "La comprensión sólo se convierte en una tarea necesaria de dirección metodológica a partir del momento en que surge la conciencia histórica, que implica una distancia fundamental del presente frente a toda transmisión histórica. La tesis de mi libro es que en toda comprensión de la tradición opera el momento de la historia efectual, y que sigue siendo operante allí donde se ha afirmado ya la metodología de la moderna ciencia histórica..."

Esta idea sobre la comprensión, Gadamer la aplica a la acción traductora, es decir la acción de traducir textos. Sobre ello, el autor dice: "Igual que en la conversación con el fin de alcanzar este objetivo, uno se pone en el lugar del otro para comprender su punto de vista, también el traductor intenta ponerse por completo en el lugar del autor. Pero esto no proporciona por sí solo ni el acuerdo en la conversación ni el éxito en la reproducción de la traducción. Las estructuras son claramente parecidas.

El ponerse de acuerdo en una conversación implica que los interlocutores están dispuestos a ello y que van a intentar hacer valer en sí mismos lo extraño y adverso. Cuando esto ocurre recíprocamente y cada interlocutor sopesa los contraargumentos al mismo tiempo que mantiene sus propias razones puede llegarse poco a poco a una transferencia recíproca, imperceptible y no arbitraria de los puntos de vista (lo que llamamos intercambio de pareceres) hacia una lengua común y una sentencia compartida.

Del mismo modo el traductor tiene que mantener a su vez el derecho de la lengua a la que traduce y sin embargo dejar valer en sí lo extraño e incluso adverso del texto y su expresión. Sin embargo, tal vez esta descripción del hacer del traductor esté demasiado recortada. Incluso en los casos extremos en los que hay que traducir de una lengua a otra el tema apenas puede separarse de la lengua. Sólo reproducirá de verdad aquel traductor que logre hacer hablar al tema que el texto le muestre, y esto quiere decir que dé con una lengua que no sólo sea la suya sino también la adecuada al original. La situación del traductor y la del intérprete vienen a ser, pues, en el fondo la misma... todo traductor es intérprete. El que algo esté en una lengua extraña no es sino un caso extremo de dificultad hermenéutica, esto es, de extrañeza y de superación de la misma.

En realidad en este sentido determinado inequívocamente son extraños todos los "objetivos" con los que tiene que ver la hermenéutica tradicional. La tarea de reproducción propia del traductor no se distingue cualitativa, sino sólo gradualmente, de la tarea hermenéutica general que plantea cualquier texto."

El alcance de la hermenéutica va ligado según Gadamer, a los alcances de la ciencia, en donde existe un lenguaje que transmitir y comprender, o textos que traducir, se hará evidente la necesaria presencia de la hermenéutica.

Sobre las funciones de la hermenéutica el autor afirma: "El fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido no es sólo un problema específico de las ciencias del espíritu... el problema de la hermenéutica va más allá de las fronteras impuestas por el concepto de método de la ciencia moderna.

Comprender e interpretar textos no es sólo una instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana en el mundo... El fenómeno de la comprensión... tiene validez propia dentro de la ciencia, y se resiste a cualquier intento de transformarlo en un método científico.

Dentro de la ciencia moderna frente a la pretensión de universalidad de la metodología científica. Su objetivo es rastrear (lo mismo) la experiencia de la verdad, que el ámbito de control de la metodología científica ahí donde se encuentre, e indagar su legitimación.

De este modo las ciencias del espíritu vienen a confluir con formas de la experiencia que quedan fuera de la ciencia: con la experiencia de la filosofía, con la del arte y con la de la misma historia. Son formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología científica."

Así entendida la hermenéutica sale del contexto rígido de la metodología de la ciencia para establecerse como una metodología que busca la comprensión de la verdad, donde y como quiera que se encuentre, mediante la interpretación, el arte de la hermenéutica."

En defensa de la hermenéutica, a la que se acusa de carecer del rigor metodológico de la ciencia moderna, Gadamer afirma que si bien la ciencia siempre buscará apoyarse en una especie de profilaxis metodológica, detrás de cualquier nuevo procedimiento metodológico siempre, también, existirá la fantasía creadora del que investiga

La hermenéutica jurídica es la parte de la ciencia que trata sobre la interpretación adecuada de los conceptos legales, lo cual es el punto de partida para determinar el contenido y los efectos de las disposiciones que regulan la vida en sociedad. En el derecho es necesario adjudicar con precisión el significado de los diferentes vocablos.

Por todo lo anterior, es decir utilizando la Hermenéutica tenemos que la expresión "*procesado*" contenida en el artículo Primero de la Ley 1648 del 12 de julio de 2013, se reconoce como una institución propia del derecho penal que hace alusión a aquella persona

juzgada para establecer la responsabilidad en un tipo penal. En nuestro medio judicial se establece con precisión unas determinadas definiciones para los sujetos procesales dependiendo de cada jurisdicción.

Es así como de manera genérica en materia civil a las partes se les denominan: demandante y demandado; en materia Penal Indiciado y procesado; en materia disciplinaria querellante y disciplinado.

De lo anterior surge el siguiente Interrogante:

¿La Ley 1648 de 2013 en su Artículo 1º parcial, vulnera los Principios de Dignidad Humana, a la Igualdad, así como el Principio al Debido Proceso, consagrados en la Constitución Política?

2. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar los argumentos jurídicos para establecer si la Ley 1648 de 2013 en su Artículo 1° parcial, vulnera los Principios de Dignidad Humana, la Igualdad, así como el Principio y Debido Proceso, consagrados en los Artículos 1°, 13 y 29 de la Constitución Política.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la Congruencia de los principios constitucionales con la Ley 1648 de 2013.
- Realizar un análisis jurisprudencial sobre los Principios de Dignidad Humana, la Igualdad, así como el Principio al Debido Proceso, en relación con el objeto de la Ley 1648 de 2013.
- Presentar la Demanda de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

3. IMPACTO INTERNO

En la elaboración de este proyecto referente a de la Demanda de Constitucionalidad del artículo Primero Parcial de la Ley 1648 del 12 de julio de 2013, se busca propone ampliar las expectativas de los estudiantes en el campo de la investigar y la realización de proyectos que como este aumenten nuestros conocimientos, y proporcionen la posibilidad de poner en práctica las herramientas que nos brinda la Constitución, en la defensa de nuestros derechos para hacerlos exigibles, teniendo en cuenta que por desconocimiento de estas herramientas constitucionales permitimos que se nos sean vulnerados.

Reflejo de esto es la situación actual que atraviesa nuestro país, donde vemos la vulneración latente de derechos a los más débiles y necesitados por parte de las autoridades quienes deberían ser garantes de la protección eficaz de estos derechos y a cambio expiden norma contraria a los principios y valores constitucionales.

Con base en lo anteriormente expuesto, se tiene que debemos estudiar y conocer más cada uno de los derechos que como ciudadanos de una organización política, cimentada en el estado social de derecho, cada uno de nosotros poseemos para así poder defenderlos cuando notemos que están siendo vulnerados, no solo los nuestros sino también impartir conocimiento y defensa para aquellos otros ciudadanos que no cuenten con ellos.

Al analizar y estudiar las diferentes sentencias emitidas por la Corte Constitucional respecto al tema en estudio se observa la gran evolución que en protección de estos derecho ha desarrollado la legislación constitucional.

Por medio de este proyecto se intenta invitar a los estudiantes a realizar estudios más frecuentes y profundos sobre las normas, ya que éstas son modificadas constantemente de acuerdo a las necesidades y evolución del país.

Así mismo la Corte Constitucional en sus fallos brinda gran avance a las leyes al pronunciarse en cada situación determinada poniendo de presente la necesidad de pronunciamiento del legislador respecto al tema que se estudie.

Al presentar la demanda de constitucionalidad demostramos los conocimientos obtenidos en el estudio de la carrera y nos preparamos para desempeñarnos en nuestra vida laboral.

CAPITULO I.

LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA

En Colombia la acción pública de inconstitucionalidad, ha sido definida como una manifestación del poder político de las más arraigadas en la tradición constitucional colombiana desde 1910 y traída al contexto de la constitución política de 1991, expresada en su artículo 40 como un derecho político, un derecho fundamental de la democracia que concede la posibilidad a cualquiera para poner en cuestión la presunción de constitucionalidad de la que gozan todas las leyes de la Republica, aprobadas por el congreso y sancionadas por el presidente.

En tal sentido a partir de la entrada en vigencia de la constitución política de 1991 y la creación de la jurisdicción constitucional en cabeza de la honorable corte constitucional, la acción pública de inconstitucionalidad, se ha convertido en una herramienta eficaz que refleja el profundo sentido democrático, participativo y deliberativo del orden constitucional vigente.

En síntesis este mecanismo, supone una especie de poder otorgada a una persona, dígase ciudadano para interponer una acción de inconstitucionalidad, poniendo en duda la constitucionalidad de una norma, al acusarla de ser contraria a los fines establecidos en la constitución.

En tanto Colombia a lo largo de su historia se ha proyectado como uno de los países de latino américa, con mayor desarrollo respecto a innovaciones jurídicas relacionadas con un sistema judicial progresista en materia de derechos sociales, económicos y culturales, al tiempo que busca la protección de principios y valores constitucionales, para tal fin creo un mecanismo de defensa liderada por los ciudadanos y la corte constitucional, encaminada con los deberes de protección y garantías del estado social de derecho.

En este orden de ideas, es preciso hacer un breve recuento histórico en base de este mecanismo.

Sobre el particular debemos remitirnos al año 1910, cuando surge en Colombia un novedoso e importante sistema de defensa judicial de la constitución política, con el fin de garantizar su supremacía en el ordenamiento normativo del país. En dicho año, los constituyentes instauraron un doble procedimiento de control de la carta fundamental: El uno por vía de excepción (con efectos particulares e inter partes), para la inaplicación de leyes incompatibles con aquella norma superior; el otro como acción pública, conferida a cualquier ciudadano y destinada a obtener un pronunciamiento judicial con efectos generales o erga omnes, respecto de leyes y decretos gubernamentales, por la Corte Suprema de Justicia, convertida en el nuevo guardián de la norma Fundamental del estado.

En ese sentido los artículos 40 y 41 del Acto legislativo 03 de 1910, dispusieron lo siguiente:

Artículo 40 “En todo caso de incompatibilidad entre la constitución y la ley se aplicara de preferencia las disposiciones constitucionales”.

Artículo 41 “A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren esta y las leyes, tendrá la siguiente:

“Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del procurador general de la Nación”.

La excepción se hizo consistir en que los funcionarios encargados de hacer en que los funcionarios encargados de hacer cumplir el ordenamiento Jurídico del país, disponen del deber de aplicar siempre la Constitución Política- Ley Suprema- de preferencia a la Ley – Norma Subordinada-, en todo caso de incompatibilidad entre las mismas. Aunque la palabra ley era entendida en sentido material y amplio, la Constitución de 1991 fue más explícita en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicaran de preferencia las disposiciones Constitucionales (Art. 4°).

La acción le permitía a todos ciudadano acusar ante la Corte Suprema de Justicia las Leyes de la Republica o los decretos Nacionales con el fin de que esta corporación decidiera definitivamente sobre su *exequibilidad*, es decir declarándolos ejecutables o inejecutables

mediante sentencia, o en otros términos, conformes con la constitución o en contradicción de ella.

Es de destacar que esta reforma aportó un sistema de control constitucional singular y propio, lo que representa un avance en los sistemas anteriores, constituyendo un valioso aporte.

Con la creación de la constitución política de 1991, se crea también la jurisdicción constitucional que es el conjunto de órganos y procedimientos tendientes a preservar la supremacía de los preceptos constitucionales, puesto su rango de norma superior, los sitúa por encima de las demás disposiciones que integran el orden jurídico.

Como viene dicho antes de la carta de 1991 el control constitucional en Colombia se encontraba a cargo de la corte suprema de justicia, quien ejercía la guarda de la constitución, esta facultad le fue dada en el acto legislativo No 3 de 1910, no obstante es de anotar la corte suprema no tenía solo a su cargo la jurisdicción constitucional, es decir no había un órgano exclusivo para está.

Es por ello que con la creación de la constitución política de 1991, el 07 de julio de 1991, se crea la jurisdicción, en cabeza de la corte constitucional, como organismo perteneciente a la rama judicial del poder público, confiándole la guarda, integridad y supremacía de la carta política.

Sin perder de vista lo anterior es preciso citar el artículo 241 de la constitución política, el cual esboza funciones de ésta, dentro de la cual se encuentran las de decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos reformativos de la constitución; resolver sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución;

La Acción de inconstitucionalidad implica el ejercicio de un derecho Político que tiene por Titular, no a toda persona, sino a cualquier ciudadano. Su fuente es el Artículo 40, numeral 6, de la Carta Política que confiere a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, entre otros medios, interponiendo “ Acciones públicas en defensa de la constitución y de la Ley”, en concordancia con el artículo 241, ibídem.

El objeto de la acción es la salvaguarda del principio de supremacía constitucional, enunciado en el artículo 4° que otorga a la Constitución el calificativo de “ Norma de Normas”, y se relaciona con las leyes de la Republica y determinados decretos con fuerza de ley (los dictados por el gobierno nacional con fundamento en los arts. 150 num. 10 y 341), en cuanto puedan contrariar el estatuto superior, con la finalidad de que la Corte, mediante sentencia, reitere la norma acusada del ordenamiento Jurídico nacional, total o parcialmente.

El titular es el ciudadano, o sea el nacional colombiano mayor de 18 años y en ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Lo cual significa que no podrá ser interpuesta ni por los extranjeros, ni por menores de 18 años, ni por personas que hayan perdido o tengan

suspendidos sus derechos políticos, inherentes a la condición de ciudadano, tampoco a nombre de una persona jurídica.

La petición deberá ser presentada por el ciudadano, directamente o por intermedio de apoderado. “La Corte no rechaza ni admite- ha dicho esta corporación- demandas de inconstitucionalidad presentadas a nombre de otro, bajo condición de que mandante y mandatario sean ciudadanos en ejercicio” (Sent. C-003 de 1993).

Por mandato expreso del numeral 01 del artículo 242, el ciudadano esta igualmente habilitado para intervenir como impugnador o defensor en los procesos promovidos por otros ciudadanos; para este efecto, en el auto admisorio de la demanda se ordenara la fijación en lista, por el término de diez días, de las normas acusadas. Así mismo debe garantizarse la intervención ciudadana en aquellos procesos que se adelantan ante la Corte y para los cuales no existe acción pública, verbigracia, los que involucran la revisión sobre constitucionalidad formal de referendos, plebiscitos, consultas populares, del orden nacional, o de los decretos de estados de excepción, o de los proyectos aprobados por el Congreso y que versan sobre leyes estatutarias.

Según se ha citado la corte como, órgano encargado de la jurisdicción constitucional, conoce de manera exclusiva de los asuntos de constitucionalidad cuyo análisis le confía la Carta Política y establece, en su condición de intérprete autorizado, las reglas jurisprudenciales sobre el alcance de las normas contenidas en la Constitución.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es preciso resaltar que la carta política de 1991 desarrollado el marco jurídico propio de la acción pública de inconstitucionalidad, a través del preámbulo donde se integran los fines del estado, basado en la organización social basada en un ámbito democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Así mismo el artículo 3 del estatuto superior señala que el pueblo ejerce la soberanía, en los términos que la constitución establece.

En conclusión podemos decir que los ciudadanos pueden interponer directamente ante la Honorable corte constitucional, demandas de las leyes, tanto por su contenido material, como vicios de procedimiento en su formación, este es un derecho consagrado en diversas disposiciones de la constitución política. Henao (2003).

Es cierto que la naturaleza jurídica de la acción pública de inconstitucionalidad -derecho político y ciudadano de aplicación inmediata-, exige del operador jurídico un análisis amplio y flexible de las demandas que se formulan ante su seno. Sin embargo, no es menos cierto que las implicaciones y consecuencias que pueden llegar a tener los fallos que se dictan en ejercicio del control constitucional, también imponen que las acusaciones propuestas se ajusten a unas condiciones mínimas de procedibilidad -como son las señaladas en el Decreto 2067 de 1991-, a partir de las cuales se ha considerado por la jurisprudencia que existe inepta demanda cuando el actor “se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.” Esto último es lo que realmente ocurre en la presente causa, donde, como

ha quedado dicho, el cargo que se invoca no sólo es incoherente en punto al contenido material de la norma impugnada sino que, además, se plantea por vía indirecta; esto es, como consecuencia de la interpretación que cumple un organismo judicial en su función de administrar justicia.

La Corte Constitucional a través de múltiples pronunciamientos ha fijado una doctrina sobre los requisitos que debe cumplir toda demanda de inconstitucionalidad. El rastreo y síntesis de dichas decisiones fue realizado por esta Corporación en la sentencia C-1052 de 2001.

En efecto, en dicha sentencia se explicó cómo “la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte da inicio a un diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior.” Se ha dicho, entonces, que esto supone como mínimo la exposición de razones conducentes para hacer posible el debate.

En lo referente a los requisitos que deben tener las razones plasmadas en el concepto de la violación se exige que éstas sean “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. Sobre la noción de cada uno de estos requisitos se dijo en la mencionada sentencia:

La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de

inconstitucionalidad, por regla general, releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente sobre una deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”.

De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una

oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisibile que se deba resolver sobre su inexecutableidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.

La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”, tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.

Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.

No obstante, con base en la jurisprudencia constitucional se ha considerado que “la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho

reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.”

Al respecto cabe anotar, que la Corte Constitucional no puede hacer el análisis de constitucionalidad de las expresiones acusadas cuando lo que se ataca es una regla diferente de la señalada en la demanda como inconstitucional, mediante deducciones o inferencias creadas por el accionante y no imputables a la norma puesta en tela de juicio.

Por esta razón la Corte ha sostenido que los cargos de la demanda deben tener la característica de ser predicables de las normas demandadas, es decir, deben guardar conexión lógica con ellas, además de lo cual deben plantear una verdadera contradicción entre el contenido normativo de la disposición que se acusa con el texto de la Constitución Política; los cargos de inconstitucionalidad no pueden estar fundamentados en la aplicación práctica que de ellos haga una autoridad pública, ni tampoco tener como fundamento hipótesis extra - normativas, es decir, no pueden estar dirigidos a cuestionar la validez constitucional de supuestos que no han sido regulados por la disposición que se ataca. De otro lado, los cargos deben ser suficientes, lo cual quiere decir que deben sustentar de forma completa la inconstitucionalidad de la ley impugnada y del modo más claro posible.

Así mismo, es preciso recordar que siendo de carácter rogado la competencia de la Corte en acciones de inconstitucionalidad, dicha Corporación no puede hacer caso omiso a esta situación, y, mucho menos establecer, por sí y ante sí, cuál es la supuesta disposición constitucional infringida y cuál es el concepto de violación que de allí se deriva. En otras palabras, quien activa el control de constitucionalidad es el ciudadano con la presentación, en debida forma, de la demanda de inconstitucionalidad y no la Corte Constitucional, la cual no tiene dentro de sus funciones (Art. 241 C.P.) efectuar el control de constitucional oficioso de los decretos dictados por el Gobierno con fundamento en el artículo 150-10 de la Constitución.

CAPÍTULO II

1. NORMA ACUSADA COMO INCONSTITUCIONAL

Se demanda para que la Honorable Corte Constitucional declare inconstitucional, la parte subrayada en negrillas de la siguiente normatividad:

LEY 1648 DE 2013 (Julio 12)
Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial.

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1o. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, la autoridad competente para resolver los procesos civiles en materia de propiedad industrial, estará facultada para ordenarle al **procesado** que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en la infracción, así como de los medios, instrumentos de producción o canales de distribución utilizados para ello. Para estos efectos la autoridad competente podrá decretar medidas cautelares. (Subrayas y negrilla fuera del texto)

2. NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS

Las Normas Constitucionales vulneradas por la disposición demandada son:

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Subrayas extra texto).

ARTICULO 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. (Subrayas extra texto).

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
(Subrayas extra texto)

ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley. (Subrayas extra texto).

ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección

ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

(Subrayas extra texto)

CAPITULO III

NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS

En cuanto a la vulneración del Artículo 1º de la C.P.

Derecho a la Dignidad Humana.

La dignidad humana es una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser retirada a alguna persona por el ordenamiento jurídico, siendo inherente a su naturaleza humana; ella no desaparece por más baja y vil que sea la persona en su conducta y sus actos.

El artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948, determina que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados de razón y de conciencia, deben actuar unos con los otros en un espíritu de fraternidad.

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, en su preámbulo afirma que “el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la sociedad humana [...] constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la

paz mundial, en el reconocimiento que esos derechos derivan de la dignidad inherente a los hombres”.

Asimismo, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, de 1984, se precisa en el preámbulo el “reconocimiento que esos derechos derivan de la dignidad inherente a los hombres”. En el mismo sentido se expresa la Convención sobre Derechos del Niño de 1989, la que explicita la “dignidad inherente a todos los miembros de la comunidad humana”

Colombia se encuentra estructurada, como un estado social de derecho, ordenamiento este inmerso en el artículo Primero (1º) de la Constitución Política de 1991, indicando como principios básicos, la protección de los derechos Fundamentales, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.

Uno de los principales fundamento del estado social derecho, encontramos el reconocimiento y respeto por la dignidad de la persona. Por esta razón el constituyente de 1991 aportó gran claridad, en relación de quien es considerado en eje de la organización socio- política, es decir: La persona Humana en su dimensión individual y social, en este último caso, en sus relaciones con los otros y en la tensión que se genera cuando ella interactúa con las demás persona.

En este contexto podemos decir que la dignidad humana representa el primer fundamento del Estado Social de derecho. Es por ello que la constitución política integra ampliamente los postulados Normativos del Estado Social de derecho, esto se demuestra al

examinar no solo lo consagrado en la lista de los principio y de la carta de derechos, sino también el ordenamiento del aparato estatal.

“...En aras de la identificación de las normas constitucionales a partir de los enunciados normativos constitucionales sobre el respeto a la dignidad humana, se afirmará la existencia de dos normas jurídicas que tienen la estructura lógico normativa de los principios: (a) el principio de dignidad humana y (b) el derecho a la dignidad humana. Las cuales a pesar de tener la misma estructura (la estructura de los principios), constituyen entidades normativas autónomas con rasgos particulares que difieren entre sí, especialmente frente a su funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico....”. Sentencia T-881 de 2002.

El artículo primero (1) de la constitución política es el pilar que representa todo el texto Fundamental:

“Art. 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

Es de señalar que la Honorable Corte Constitucional ha determinado algunos postulados que se desprenden del artículo primero (1). Los cuales son:

a) El Estado es definido a través de sus caracteres esenciales. Entre estos caracteres y el Estado la relación es ontológica: El Estado Colombiano es tal, en tanto sus elementos esenciales están presentes; no se trata de cualidades, capacidades o dotes del Estado, sino de su propia naturaleza, de su propio ser.

b) Los caracteres esenciales del Estado tienen que ver no solo con la organización entre poderes y la producción y aplicación del derecho, sino también y de manera especial, con el compromiso por la defensa de contenidos jurídicos materiales.

Así mismo el Honorable tribunal esboza:

“El sentido y alcance del artículo primero no puede ser desentrañado plenamente a partir de una interpretación reducida al análisis de su texto. Cada una de las palabras del artículo posee una enorme carga semántica, la cual a través de la historia del constitucionalismo occidental, se ha ido decantando en una serie de nociones básicas que delimitan su alcance y lo hacen coherente y razonable. Una interpretación que se aparte del contexto nacional e internacional en el cual han tenido formación los conceptos del artículo primero, puede dar lugar a soluciones amañadas y contradictorias.”

Resulta oportuno indicar que según el artículo primero de la constitución la Republica de Colombia está fundada “En el Respeto de la Dignidad Humana” entendido esto como que la persona humana es jurídicamente digna porque tiene un valor intrínseco absoluto, que le hace acreedora de respeto por parte de los integrantes de su especie. Este reconocimiento viene desde 1948 cuando el preámbulo de la Declaración Universal reconoció “La Libertad, la Justicia y la Paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca

y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia Humana” esa “Dignidad intrínseca”.

Con base en lo anterior podemos decir que como consecuencia de su dignidad la persona es un ente autónomo e inviolable, que no puede ser privada de sus derechos inherentes.

De tal modo que no es acertado hablar del derecho a la dignidad como si fuera un bien jurídico análogo a la vida, la libertad o la honra., dado que la persona tiene derechos por que es digna “Los derechos inalienables de la persona” cuya primacía reconoce el artículo quinto de la constitución política, hallan en la dignidad humana fundamento, su título y su medida.

En este Orden de ideas la Honorable corte constitucional mediante sentencia C-1287 DEL 2001 EXPRESO:

“Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el “C-1287-01 (Subraya Extra texto)

Por tal razón el estado social de derecho como se ha dicho está fundado en la dignidad del ser humano, obligándose a proteger los derechos que materializan la posición de la

persona, estas garantías o derechos son por tanto intransferibles, es decir no negociables comercialmente, por así decirlo.

El estado está obligado a proporcionar estos derechos en condiciones de igualdad a todo ser humano.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando se aprecia una clara vulneración de los principios establecidos en el artículo primero de la constitución política por parte de la norma acusada, es decir de la Ley 1648 de 2013 en su Artículo 1° parcial, al utilizar un término Jurídico, que es utilizado para referirse a una persona a la cual ya se le ha indilgado, mediante el procedimiento penal pertinente un delito y está ya siendo juzgada por este.

La Corte Constitucional, Respecto al principio de la dignidad humana en cuanto al contenido de la dignidad Humana esta ha dicho:

“...Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales

concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.” Sentencia T-881/02.

En resumen, los cargos por los cuales el artículo Primero parcial de la ley 1648 de 2013 que establece medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial ha de ser declarado inconstitucional en relación con el artículo Primero Superior, se pueden sintetizar en que la norma *sub examine* transgrede el artículo 1º, de la Constitución Política de 1991, toda vez, que al utilizar un calificativo o denominación como lo es “procesado” la cual es exclusiva del derecho penal, empleada para identificar al sujeto acusado dentro de una acción de tipo penal y quien ya se le está siendo juzgado, lo cual ocasiona violación directa al principio constitucional de la dignidad humana.

Tal como lo ha señalado la Corte constitucional al manifestar que:

“Existe una línea jurisprudencial consolidada por esta Corporación, relativa a las funciones del lenguaje jurídico y la posibilidad que sus ámbitos valorativos y de validación lleguen a vulnerar derechos y valores constitucionales, en especial la igualdad y la dignidad humana de los sujetos destinatarios de las prescripciones legales. Esta doctrina parte de advertir que el lenguaje normativo no se reduce a describir hechos y consecuencias

jurídicas, sino que es posible adscribirle tres tipos de funciones definidas. La primera, de índole descriptiva en los términos mencionados. La segunda, de tipo valorativo, a través de la cual las normas, lejos de tener un carácter neutro, en realidad categorizan, arbitran y definen situaciones específicas, imponiéndoles determinados criterios que las promueven, rechazan, discriminan o distinguen de otras. La tercera, que puede definirse como de validación, refiere al papel que cumple el derecho, en general, y las normas jurídicas en particular, en la creación de realidades: las normas jurídicas tienen la función de constituir estándares para la conducta, a través de la definición de aquellos comportamientos permitidos y otros prohibidos. Si esas normas tienen tal estatus, sus expresiones validan como parámetro jurídico, y por ello coactivo, lo que ellas expresen. Esto más aún si se tiene en cuenta que estos preceptos son producto de procedimientos democráticos de formación, esto es, acuerdos representativos sobre lo que se estima correcto, incorrecto, objeto de afianzamiento o de rechazo. Por lo tanto, ese precedente comparte identidad teórica con las propuestas que desde la filosofía del lenguaje afirman que las expresiones del lenguaje natural, código que comparte el Derecho, no solo son descriptivas sino que construyen la realidad, en tanto califican y explican el ámbito fáctico. Esta ha sido la posición de la Corte, al indicar que como consecuencia de la comprobación de las mencionadas funciones del lenguaje jurídico, el legislador debe mostrarse especialmente cuidadoso en la elección de los términos que integrarán las expresiones normativas, pues los mismos pueden llegar a legitimar opciones valorativas incompatibles con la Constitución. De forma correlativa, a pesar que el control de constitucionalidad se concentra primariamente en los enunciados normativos y no en los textos legales considerados en su perspectiva formal, la Corte está facultada para analizar la exequibilidad de expresiones que, al mostrarse incompatibles en

su significación con los postulados superiores, deben ser excluidas del ordenamiento jurídico.” Sentencia. [C-066-13](#)

De acuerdo con los razonamientos realizados, se aprecia una clara vulneración de los principios establecidos en el artículo Primero de la constitución política por parte de la norma acusada, es decir de la Ley 1648 de 2013 en su Artículo 1° parcial, al utilizar un término Jurídico, característico o propio del derecho penal, utilizado para referirse a una persona a la cual ya se le ha indilgado, mediante el procedimiento pertinente un delito, ameritando el debido proceso con los protocolos pertinentes para establecer las responsabilidades penales respectivas. Por tanto, no es compatible con el respeto a la dignidad humana, pregonado por la anterior norma constitucional referenciada, el denominar de manera deleznable conceptos que no sean los pertinentes a las formas y terminologías propias de cada juicio. La dignidad humana sobre la que se fundamenta nuestra organización política debe ser respetada en cada actuación administrativa y judicial lo cual involucra la asertiva denominación del rol de las personas, máxime cuando están en juego la honra y el buen nombre, derechos que también tienen primacía según lo establecen los artículos Quinto y Quince Superior.

Respecto al Artículo 5 de la C.P.

El estado constitucional democrático, ha sido la respuesta Jurídica- Política, derivada de la actividad intervencionista del estado, que tiene el compromiso de garantizar los derechos fundamentales como límites frente al poder de los gobernantes y, en definitiva, frente a la capacidad normativa del legislador, en procura de proteger los derechos de los cuales son titulares las personas. Estas garantías conocidas como derechos tienen el cometido

de ayudar en la transcendencia o superación del ser humano. No son meras cláusulas, ratifican la importancia de la condición humana. Por ello, los derechos están fuera del comercio, por tanto no son intransferibles, y han de ser brindados en condiciones de igualdad a todo sujeto de la especie. Es una prioridad y finalidad del estado. Por ende es en la constitución donde los principios y derechos fundamentales encuentran el espacio idóneo para alcanzar su eficacia y plenitud, como factores rectores teniendo como condición, que efectivamente sean fundamentales y no posición relativas o momentáneas. En este sentido la constitución impregnada y condicionada como detentora de los principios y derechos fundamentales.

Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para determinar la solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de ser normas dotadas de valor normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa. En síntesis, un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la constitución, pero puede, en ciertos casos necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisión judicial. La diferencia entre principios y reglas o normas constitucionales no proviene de su obligatoriedad jurídica sino de su forma de aplicación: mientras los primeros requieren de una mediatización fáctica o normativa para su aplicación, las segundas son aplicables

directamente. Más aún, el establecimiento de principios obedece, en el Estado social de derecho, a la voluntad constituyente de otorgar una mayor protección a los valores constitucionales. Esta mayor protección tiene lugar por el hecho de que el principio se irradia a toda la organización político-jurídica y, en consecuencia, está garantizado en la aplicación de todas las reglas de aplicación directa. Los valores y principios incluidos en el texto constitucional cumplen la función de asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de la Constitución. Aquí se refleja la voluntad constituyente de hacer obligatorio el respeto de principios considerados como universales e inherentes a la persona, cuya obligatoriedad va más allá de las contingencias propias del ordenamiento jurídico nacional.

Por lo anterior, la Corte Constitucional mediante sentencia ha expresado:

“Los principios constitucionales son la base axiológico-jurídica sobre la cual se construye todo el sistema normativo. En consecuencia, ninguna norma o institución del sistema puede estar en contradicción con los postulados expuestos en los principios. De aquí se deriva el hecho de que toda la discrecionalidad otorgada a los órganos y creadores del derecho debe estar fundada a partir del hilo conductor de los principios. La movilidad del sentido de una norma se encuentra limitada por una interpretación acorde con los principios constitucionales. Los derechos fundamentales son, como todas las normas constitucionales, emanación de los valores y principios constitucionales, pero su vinculación con estos es más directa, más inmediata, se aprecia con mayor evidencia. Todo derecho fundamental debe ser emanación directa de un principio.” Tribunal Constitucional, Sentencia T-406-92.

El artículo 5 Superior hace un reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables, con ello el constituyente hace real y pública su convicción de la calidad y majestad de los derechos inherentes e irrenunciables de todo ser humano, prevalecen, predominan y sobresalen dentro del universo de lo político y lo jurídico, hasta el punto que su reconocimiento, respeto y armonización, tutela y promoción se identifican con el logro del bien común.

Por esta razón la primacía de los derechos fundamentales impone por lo tanto a las autoridades, deberes y prohibiciones.

“Esta Corte ha resaltado que no puede condicionarse la validez de un derecho constitucional a los criterios de las mayorías y a su compatibilidad con los objetivos de interés general, por cuanto eso implicaría “quitarle toda su eficacia específica puesto que, en una gran medida, los derechos constitucionales fundamentales son las promesas que formulan las mayorías a las minorías - y a esas minorías radicales que son las personas- de que su dignidad e igualdad serán siempre respetadas””. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02.

El artículo Primero parcial de la ley 1648 de 2013 que establece medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial acusado, en la presente demanda viola el artículo 5to, de la Constitución Política de 1991, toda vez, que transgrede la importancia de derechos fundamentales inherentes al ser humano., al dar un trato discordante con la majestad de los derechos antes expresada, usando la denominación de “Procesado”, vocablo que como

bien se aprecia en la totalidad de la interpretación jurisprudencial denota una relación inescindible con los aspectos penales llevando una fuerte carga que contradice la realidad procesal propia del área civil, este calificativo se le da a quien es sindicado de un punible, produciendo un equívoco conceptual grave para la persona que por una controversia civil entra a ser considerada sujeto activo propio del derecho penal.

A ejemplo citamos las sentencias C- 394/94, C-828/10, C-621/98, T-966/00, C-488/96 donde se aprecia que la calificación de procesado solo se aplica a ciertas personas en el procedimiento penal.

En cuanto al artículo 13 de la C.P.

El valor de la igualdad se puede percibir desde la perspectiva de igualdad formal o igualdad material. El principio de igualdad constituye la garantía efectiva de los derechos sociales como una de las finalidades en el estado social de Derecho, en el sentido que deba trascender la igualdad en la ley o en su aplicación en procura de la igualdad material, como pretensión de obtener unas ciertas condiciones básicas para satisfacer sus derechos de allí, poder dotar a las personas de los presupuestos mínimos en el ejercicio de la libertad.

En este sentido podemos decir que uno de los presupuestos de la condición humana, es convertir en un valor ético, la igualdad, atribuida como derecho a todas las personas por el hecho de ser seres humanos. No obstante el desarrollo social, económico y cultural muestra la pluralidad de las condiciones de los pueblos y personas, donde todos no tenemos las mismas condiciones psíquicas y materiales, es decir “somos iguales entre desiguales”, por lo

tanto, le corresponde al Estado la adopción de las medidas necesarias para garantizar o restablecer un equilibrio entre situaciones marcadamente desiguales.

La igualdad es por tanto un principio constitucional, una característica del estado social de derecho, que encuentra su fundamento en el estado de derecho, otorgándole la calidad de derecho fundamental, creando la práctica de interpretación jurídica política y definida el principio y diseño del estado, exteriorizando que el Derecho se regulariza como una disposición que ampara la senda de la igualdad a la igualdad material.

De allí se desprende que el principio de igualdad se traduce a que no se instauren excepciones o privilegios o discordancias que excluyan a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se persigue que la ideal y efectiva igualdad reside en aplicar la ley en cada uno de los sucesos de acuerdo a las discrepancias constitutivas de ellos.

Es necesario recordar el examen de constitucionalidad elaborado por la honorable Corte Constitucional en sentencia C-022 de 1996 en la cual buscó a través del test de razonabilidad o proporcionalidad dar respuesta a las siguientes preguntas:

“¿Cuál es el criterio relevante para establecer un trato desigual? o, en otras palabras?

¿Es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual?.

En respuesta a esto la Corte en su saber jurídica inicia su razonamiento, acogiendo los criterios expuestos por Norberto Bobbio, quien afirma que el concepto de igualdad es relativo, al menos en tres aspectos:

Igualdad en lo relativo, al menos en tres aspectos: a. Los sujetos entre los cuales se quieren repartir los bienes o gravámenes; b. Los bienes o gravámenes a repartir; c. El criterio para repartirlos.

“Hablar de igualdad o desigualdad, siguiendo alguna variante de la fórmula clásica Tiene sentido sólo en la medida en que se respondan las siguientes tres preguntas: ¿Igualdad entre quiénes?, ¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio? Los sujetos pueden ser todos, muchos o pocos; los bienes a repartir pueden ser derechos, ventajas económicas, cargos, poder, etc.; los criterios pueden ser la necesidad, el mérito, la capacidad, la clase, el esfuerzo, etc.”

La Corte en esta sentencia, explicó que el Principio de Igualdad se puede desintegrar en dos principios parciales los cuales son:

a. “Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual.

b. Si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual.”

A partir de estas Formulaciones la Corte examina dos puntos, en primer lugar la carga argumentativa se inclina favoreciendo el principio de la igualdad ya que la carga de la prueba tiene mayor peso sobre quien pretende establecer un trato diferente; y el segundo puntos se basa en la razón suficiente que justifique un trato desigual.

La Corte ha elaborado estos razonamientos mediante la aplicación de test de proporcionalidad, es así como en sentencia T-499 de 1992, define la igualdad como un criterio de distribución de beneficios o de cargas, estos beneficios o cargas hacen alusión a bienes o intereses.

En este sentido la Corte acudió al Juicio de test de igualdad, en aras de determinar el criterio de igualdad que resulta compatible con la constitución política.

“Dicho juicio supone partir de una situación fáctica determinada, a partir de la cual se analiza si el trato igualitario o desigual, según el caso, resulta constitucionalmente admisible”.

De igual forma la honorable corte constitucional en diversos pronunciamientos ha manifestado que:

“El principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a

destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes. Estos cuatro contenidos tienen sustento en el artículo 13 constitucional, pues mientras el inciso primero del citado precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce de derechos, libertades y oportunidades, al igual que la prohibición de discriminación; los incisos segundo y tercero contienen mandatos específicos de trato diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o especialmente vulnerables.” Sentencia C-250-12.

La ley 1648 de 2013, está dirigida a establecer medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial, dirimiendo lo concerniente a los procesos civiles de está.

No obstante el artículo primero parcial de la mencionada disposición, utiliza en su hermenéutica, un calificativo, perteneciente al derecho penal que identifica al sujeto que después de una indagación exhaustiva realizada por este organismo investigativo decide imputar cargos y solicitar su juzgamiento, por lo dicho, esta norma vulnera el derecho a la igualdad teniendo en cuenta que es una disposición que regula la materia en procesos civiles, en los que las partes son identificadas como Parte Demandante y Parte Demandada.

Es así como podemos apreciar que en el Código de Comercio, normativa reguladora de las relaciones de los comerciantes y todo lo referente a la actividad comercial, en su artículo 612, trata lo concerniente a la tramitación de procesos de la propiedad industrial, para mayor ilustración transcribo la norma antes mencionada así:

ARTÍCULO 612. TRAMITACIÓN DE PROCESOS RELATIVOS A PROPIEDAD INDUSTRIAL - COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO>. Los procesos relativos a la propiedad industrial que sean de competencia del Consejo de Estado se tramitarán mediante el procedimiento ordinario de lo contencioso administrativo.

Si se demandare la nulidad de un acto generador de una situación individual y concreta, se notificará personalmente al titular de aquella antes de la fijación en lista. Si alguna de las partes lo pide se celebrará audiencia pública. (Subrayas y negrillas fuera de texto)

La discriminación denunciada en la norma acusada de inconstitucionalidad es palmaria, dado que para las personas que se encuentran dirimiendo conflictos inherentes a la propiedad industrial, por medio de la jurisdicción civil, son calificadas en el artículo primero parcial de la acusada disposición, igual a aquellas que están siendo ya juzgadas por la jurisdicción penal, es decir, con el artículo Primero parcial de la ley 1648 de 2013 que establece medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial se vulnera su derecho a la igualdad de trato frente a las personas que son partes dentro de otros procesos civiles.

En este caso el derecho a la igualdad frente a la ley, impone al legislador otorgar el mismo tratamiento a todas las personas que están en el mismo supuesto de hecho que él pretende regular. Por lo tanto, para establecer si una disposición legal concreta es discriminatoria, el primer presupuesto lógico que el juez constitucional debe verificar es que tal disposición realmente otorgue un trato diferente a personas colocadas en la misma

situación de hecho. Si ello efectivamente ocurre, entonces debe examinar si ese tratamiento desigual persigue alguna finalidad constitucionalmente importante que lo justifique, comprobado lo cual debe establecerse si la limitación al derecho a la igualdad era adecuada para alcanzar tal finalidad. Además, para que dicha restricción sea conforme con la Constitución, se requiere que sea ponderada o proporcional stricto sensu. *“Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional.”*Sentencia. [C-1047-01](#).

De igual forma la corte ha señalado que la igualdad ante la ley se puede romper de dos maneras: a) dándole algo a alguien que no le damos a los demás y b) no dándole algo a alguien, que le damos a los demás; en el primer caso concedemos un privilegio; en el segundo caso discriminamos. El propio artículo 13 de la Constitución prohíbe las discriminaciones por razón del origen familiar y la norma demandada viola este artículo por cuanto consagra una discriminación por la única razón del origen familiar y condena a unos ciudadanos inocentes, a la muerte civil por la única razón, de que son familiares de otra persona.

Es de recordar que la Corte Constitucional ha establecido que el contenido del derecho de igualdad se estructura a partir de la conjunción de seis elementos básicos:

1. *El principio general que nos enseña que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades.*

2. *La prohibición de establecer o consagrar discriminaciones, elemento que pretende que no se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, o posición económica.*
(Subrayas y negrillas fuera de texto)

3. *El deber del Estado de promover condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas.*

4. *La posibilidad de conceder ventajas o prerrogativas en favor de grupos disminuidos o marginados.*

5. *Una especial protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y*

6. *La sanción de abusos y maltratos que se cometan contra personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. En definitiva, para la Corte Constitucional el derecho de igualdad Implica: El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas éstas que en justicia deben ser relevantes para el derecho. (Sentencia T-432 de junio 25 de 1992).*

El derecho constitucional fundamental a la igualdad, como lo ha definido esta la Corte Constitucional implica una comparación entre por lo menos dos situaciones o personas, de las cuales, cumplido el juicio de igualdad o comparación, no pueden predicarse diferenciaciones por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, factores dispuestos por el Constituyente en la Carta de manera meramente enunciativa, que no exhaustiva, para indicar qué tipo de circunstancias no pueden ser fundamento de trato desigual, respecto de quienes se encuentran en la misma situación. Se predica la igualdad de las personas frente a la ley, del trato y protección que a ellas deben brindar las autoridades de la República, de derechos, libertades y oportunidades, existiendo obligación de carácter constitucional para que el Estado sea el promotor de una igualdad no teórica ni en el papel, sino, por el contrario, real y efectiva, que deberá cumplir, entre otras muchas formas, protegiendo especialmente a quienes por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, siendo ésta sí una pauta suficiente para proporcionar trato diferente, pues se apoya en el principio constitucional del trato diferencial positivo.

La norma sub examine se torna discriminatoria por qué su contenido material y su ámbito de aplicación en materia civil no se ajustan a la Constitución, esa diferencia surge como consecuencia de un exceso o un defecto en las previsiones que conforma el acusado artículo Primero parcial de la ley 1648 de 2013 que establece medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial.

Respecto al Artículo 15 de la C.P.

El buen nombre es también como la fama o la reputación de una persona, es un bien jurídico, atribuido a la persona por el solo hecho de serlo. Tal como lo señala el artículo 15 Superior *“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.”*, este derecho está dirigido a la protección de todo ser humano que se encuentre dentro del territorio nacional, contra cualquier clase de difamación.

La Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ha señalado que el derecho al buen nombre tiene Carácter “PERSONALISIMO”

“Esta Corte ha señalado que el derecho al buen nombre tiene carácter personalísimo, relacionado como está con la valía que los miembros de una sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama de la persona el componente que activa la protección del derecho. Se relaciona con la existencia de un mérito, una buena imagen, un reconocimiento social o una conducta irreprochable, que aquilatan el buen nombre a proteger, derecho que es vulnerado cuando se difunde información falsa o inexacta, o que se tiene derecho a mantener en reserva, con la intención de causar desdoro contra el prestigio público de una persona.” Sentencia T-949-11.

Así mismo lo define como: *“el buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas.* (Subrayas fuera de

texto) Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo.” Sentencia C-489-02.

El derecho al buen nombre constituye un aspecto del derecho a la dignidad y de la reputación de las personas, y se define “como la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él.

En el mismo sentido, el honorable tribunal constitucional ha resaltado que *“el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad”*. Sentencia. [T-856-03](#)

Se considera, entonces, que son atentados al derecho al buen nombre todas aquellas informaciones contrarias a la verdad, que, sin justificación alguna, distorsionen el prestigio social que tiene una persona. Al respecto la Corte ha señalado que *“se atenta contra este derecho, cuando sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público - bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionen el concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfruta del entorno social en cuyo*

medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen".

En síntesis, el derecho al buen nombre está instituido como fundamental por el artículo 15 de la Carta Política, según el cual el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar, de lo que se deduce que obliga a todos y en toda clase de relaciones, tanto oficiales como particulares y sean ellas públicas o privadas. Este derecho está atado a todos los actos o hechos que una persona realice y por las cuales la sociedad hace un juicio de valor sobre sus virtudes y defectos. Por ello, se estima que el buen nombre es exterior a su titular, es amplio en su concepción y no tiene límites en cuanto a su aplicabilidad. En últimas, “el buen nombre, la reputación o la buena fama, el prestigio, es la opinión que los demás seres se han formado de un individuo, y son el reflejo adecuado y equitativo de sus ejecuciones y logros en la esfera social donde ha convivido.

En suma el presente cargo de vulneración contra la constitución estriba en que el artículo Primero parcial de la ley 1648 de 2013 que establece medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial es claramente incompatible con los derechos al buen nombre que según la Sentencia C-442/11 de la Corte Constitucional se refiere a la reputación de la persona el cual se afecta con señalamientos falsos como delitos o aspectos que dañen la integridad moral, el buen nombre se refiere a la apreciación que se otorga a la persona por asuntos relacionales o el cumplimiento de obligaciones dinerarias, Este derecho tiene una cercana relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo, la afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la emisión de información

falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público como es el caso de la norma demandada.

3.5. RESPECTO AL ARTÍCULO 21 DE LA C.P.

La honra se refiere más a la apreciación de la sociedad hacia una persona, a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados con ella. Dicho concepto incorpora la valoración en sí de la persona.

Ha dicho el Tribunal Constitucional que *“La honra es un atributo inmanente que se deriva de su condición de ser humano y de la dignidad de las personas. El derecho al buen nombre constituye un aspecto del derecho a la dignidad y de la reputación de las personas, y se define “como la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él”. Sentencia T-856/03 (Subrayas y negrillas extra texto,)*

En el mismo sentido la Corte dijo “El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad, Sentencia T-494 de 2002.

Cabe agregar que la honra como atributo de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y aunque en gran medida asimilable al buen

nombre, tiene sus propios perfiles y que la Corte en sentencia definió como la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”. Sentencia C-489-02

La Corte en la sentencia T-411 de 1995 lo definió como la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”.

De igual forma en la Sentencia C-063-1994 la Corte precisó el alcance que dentro del derecho a la honra tiene el concepto del honor y señaló que “aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a la conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-.”

En cualquier caso, la honra es un derecho fundamental de todas las personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado a partir de esa

consideración de la dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la honra, la Corte, en Sentencia T-322 de 1996, señaló que del mismo hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta.

Por otra parte, en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos se encuentran previstos los derechos a la intimidad, la honra y al buen nombre, así como la obligación que tienen los Estados de brindarles protección.

Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que *“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques.”*

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estableció en su artículo 17:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, consagra:

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que *“toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.”* Y agrega, en el numeral 2 que *“en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en se hubiera incurrido.”*

Concluyendo el presente argumento de vulneración, el artículo Primero parcial de la ley 1648 de 2013 que establece medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial es incompatible al Derecho a la Honra y por ello es contrario a la Constitución

Política de 1991, en lo que respecta al término “Procesado”, por lo cual se solicita la declaratoria de inexequibilidad de dicha palabra. El mencionado aparte normativo crea una estela de duda sobre la apreciación que tiene de una persona y su dignidad.

3.6. REFERENTE AL ARTÍCULO 29 DE LA C.P.

El derecho al Debido Proceso es un derecho de esencial importancia, teniendo en cuenta que nuestra Constitución Política esta cimentada en un Estado social y democrático de derecho, es así como el artículo 29 de la Constitución Política, dispone que el Debido Proceso debe observarse, en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9).

La jurisprudencia Constitucional ha definido el derecho al debido proceso como:

“El conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia” Corte Constitucional Sentencia C-980-10. (Negritillas fuera de texto)

De igual forma ha expresado que:

“El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales” (Corte Constitucional. Sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 2001).

En tal sentido, el debido proceso constituye un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen verdaderos derechos fundamentales.

El artículo Primero parcial de la ley 1648 de 2013 que establece medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial, resulta violatorio del artículo 29 superior, toda vez, que vulnera con el término “Procesado” los derechos al debido proceso y a la defensa en un Estado social y democrático de derecho, en el cual primero se debe comprobar la responsabilidad individualizadamente presumiendo la inocencia del procesado.

Cabe señalar que los componentes característicos, no independientes, que constituyen el concepto del delito, según la legislación vigente genéricamente son: La Acción, la

Tipicidad, la Antijuridicidad, y la Culpabilidad. Es posible que el procesado pueda ser culpable e imputársele una pena privativa de libertad.

En sintetizando el presente cargo de vulneración constitucional, el artículo Primero parcial de la ley 1648 de 2013 que establece medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial, indilga indebidamente a una persona la calidad de infractor y acusado, al definirlo como “Procesado” desde el inicio de un proceso civil, en materia de propiedad industrial, cuyo calificativo es completamente desproporcionado, pues en los procesos civiles las partes son identificadas como demandante y demandado.

Para establecer la guarda de la Constitución, “la Corte debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control. La razón es simple: el control de constitucionalidad es un juicio relacional de confrontación de las normas con la Constitución, lo cual hace inevitable que el juez constitucional deba comprender y analizar el contenido y alcance de las disposiciones legales bajo examen. En ese orden de ideas, el análisis requiere una debida interpretación tanto de la Constitución como de las normas que con ella se confrontan”. Corte Constitucional Sentencia C-128/02, En similar sentido la Corte Constitucional ha expresado que “El cumplimiento efectivo de la misión institucional que le ha sido confiada a la Corte Constitucional como guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, requiere que ésta se pronuncie sobre el sentido real de las normas controladas, no sobre su significado hipotético”.

A modo de conclusión acogemos lo expresado por la Corte Constitucional así: *“El lenguaje normativo no se reduce a describir hechos y consecuencias jurídicas, sino que es*

posible adscribirle tres tipos de funciones definidas. La primera, de índole descriptiva en los términos mencionados. La segunda, de tipo valorativo, a través de la cual las normas, lejos de tener un carácter neutro, en realidad categorizan, arbitran y definen situaciones específicas, imponiéndoles determinados criterios que las promueven, rechazan, discriminan o distinguen de otras. La tercera, que puede definirse como de validación, refiere al papel que cumple el derecho, en general, y las normas jurídicas en particular, en la creación de realidades: las normas jurídicas tienen la función de constituir estándares para la conducta, a través de la definición de aquellos comportamientos permitidos y otros prohibidos. Si esas normas tienen tal estatus, sus expresiones validan como parámetro jurídico, y por ello coactivo, lo que ellas expresen. Esto más aún si se tiene en cuenta que estos preceptos son producto de procedimientos democráticos de formación, esto es, acuerdos representativos sobre lo que se estima correcto, incorrecto, objeto de afianzamiento o de rechazo. Por lo tanto, ese precedente comparte identidad teórica con las propuestas que desde la filosofía del lenguaje afirman que las expresiones del lenguaje natural, código que comparte el Derecho, no solo son descriptivas sino que construyen la realidad, en tanto califican y explican el ámbito fáctico. Esta ha sido la posición de la Corte, al indicar que como consecuencia de la comprobación de las mencionadas funciones del lenguaje jurídico, el legislador debe mostrarse especialmente cuidadoso en la elección de los términos que integrarán las expresiones normativas, pues los mismos pueden llegar a legitimar opciones valorativas incompatibles con la Constitución. De forma correlativa, a pesar que el control de constitucionalidad se concentra primariamente en los enunciados normativos y no en los textos legales considerados en su perspectiva formal, la Corte está facultada para analizar la exequibilidad de expresiones que, al mostrarse incompatibles en su significación con los

postulados superiores, deben ser excluidas del ordenamiento jurídico.” (Negrillas y cursiva extra texto) Sentencia C-066 de 2013

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

Conforme al artículo 40 Superior, los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Específicamente, su numeral 6°, establece que los ciudadanos pueden “Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.” En concordancia con este precepto, el artículo 242 de la Constitución Política, dispone que cualquier ciudadano puede interponer la acción pública de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 241 del mismo ordenamiento.

La acción de inconstitucionalidad se caracteriza por ser pública e informal. Es pública, en cuanto es una manifestación del ejercicio del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político; e informal, como quiera que, en principio, para su presentación, solamente es necesario acreditar la calidad de ciudadano, sin que se exija para el efecto formación profesional especializada, o el cumplimiento riguroso de presupuestos formales.

La jurisprudencia constitucional ha indicado que, si bien la acción pública de inconstitucionalidad es informal, no es desproporcionado establecer unos requisitos mínimos para su ejercicio, como presupuestos necesarios para el planteamiento de un problema razonable, ante el juez constitucional.

Por lo anterior, el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”,

establece que las demandas de inconstitucionalidad deberán contener (i) “el señalamiento de las normas acusadas inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.”

Particularmente, con respecto al requisito de presentación de las razones por las cuales la disposición demandada se considera inconstitucional, la Corte ha identificado las condiciones que deben cumplir para que el cargo sea admisible. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado uniformemente que el cargo de inconstitucionalidad debe cumplir con las exigencias de “claridad, certeza, especificad, pertinencia y suficiencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Pablo Rico Gallegos, "La praxis posible (teoría e investigación para la práctica docente", Unidad 164 de la Universidad Pedagógica Nacional, Zitácuaro, Michoacán, México, 2001, pp. 292-297

<http://www.monografias.com/trabajos35/hermeneutica/hermeneutica.shtml#ixzz339GUpU9t>

Acevedo Restrepo, Delfín. (1986). La Constitución Nacional y sus principales reformas. Bogotá: ESAP, 1986.

Ballen, Rafael. (1991). Constituyente y Constitución de 1991. Bogotá: Editorial Jurídica de Colombia.

Burgos O. Ignacio. (1997). Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparos, Editorial Porrúa, México.

Cárdenas Gómez, Humberto (1995). Seminario Internacional de Derecho Administrativo. Medellín.

Contraloría General De La Republica. (2000). Derechos Ciudadanos, Mecanismos Para la Protección de los Derechos Ciudadanos. Bogotá, Contraloría General de la Republica.

Henao Hidrón, Javier. (2003). Derecho Procesal Constitucional. Bogotá: Editorial Temis.

Rodríguez Peñaranda, María Luisa. (2005). Minoría Acción Pública de Inconstitucionalidad y Democracia Deliberativa. Bogotá. Universidad Externado de Colombia,

Javier. (1994). Panorama del Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá: Editorial Temis

Robert Alexy. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 94.

Rodríguez, Libardo. (1999). Derecho Administrativo General y Colombiano. Novena Edición. Santafé de Bogotá: Editorial Temis.

Estructura del Poder Público en Colombia. Bogotá: Editorial Temis S.A. Décima Edición, 2006.

Younes Moreno, Diego.(2004). Curso de Derecho Administrativo. Ed. Temis. Octava Edición actualizada.

Vicepresidencia de la República (2006), Articulación de las bases del Plan Nacional

de Acción en Derechos Humanos Derecho Internacional Humanitario con los objetivos de Desarrollo del Milenio, Bogotá, Taller Regional- Consejo Nacional de Planeación, 14 p.

ANEXOS